

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

20 de junio de 2011

Índice AI: MDE 13/061/2011

Irán: El segundo aniversario del homicidio de Neda Agha Soltan pone de manifiesto la impunidad casi total de los funcionarios

Dos años después de que la muerte de Neda Agha Soltan fuera captada en un teléfono móvil y pasara a simbolizar la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009, Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades de Irán para que pongan fin a la impunidad de los funcionarios responsables de homicidios ilegítimos, tortura y otras violaciones de derechos humanos.

La grabación de los últimos momentos de vida de Neda Agha Soltan, tras recibir un disparo en el pecho el 20 de junio de 2009, se difundió al mundo entero a través de Internet. Nadie ha comparecido ante la justicia por su muerte y, en lugar de investigarla de forma imparcial, las autoridades iraníes –de acuerdo con su arraigado patrón de encubrimiento de los abusos– recurrieron a amenazas, acusaciones cruzadas, confusión y nuevos abusos para tratar de eludir la responsabilidad. Un miembro del Basij al que los testigos oyeron decir: “no pretendía matarla”, y cuya identificación fue publicada en Internet, no ha sido procesado, pero apareció en un documental emitido hace un año por la televisión estatal, en el que negaba toda responsabilidad. Arash Hejazi, el médico que estaba presente en el lugar de los hechos, se vio obligado a buscar asilo en el extranjero, ante el temor por su seguridad. A la familia y los amigos de Neda Agha Soltan los hicieron aparecer en la televisión estatal negando que el gobierno fuera responsable, pese a que el padre de Neda, Ali Agha Soltan, dijo a la BBC Persa en diciembre de 2009 que “su asesino sólo puede ser del gobierno”.

Neda Agha Soltan fue una de las más de 70 personas que murieron durante los disturbios que siguieron a las elecciones. El único caso en el que se ha juzgado a funcionarios en relación con los abusos es el relativo al centro de detención de Kahrizak, donde al menos cuatro hombres murieron a consecuencia de la tortura u otros malos tratos. Más tarde se juzgó a 12 hombres –11 policías y un detenido, según se cree–, de los que 2 fueron condenados a muerte, según los informes, pero no está claro qué fue de los 11 a los que las autoridades declararon haber condenado en relación con los abusos cometidos contra detenidos en ese centro. No se ha emprendido ninguna acción contra los cargos más altos a los que una investigación parlamentaria implicó en los abusos.

Otras familias siguen sin conocer las circunstancias exactas de la suerte corrida por sus seres queridos, como es el caso de Parvin Fahimi, que ha hecho campaña para averiguar la verdad sobre la muerte, por una herida de bala en el corazón, de su hijo de 19 años, **Sohrab Arabi**. Sohrab Arabi desapareció durante una manifestación el 15 de junio de 2009, y su familia no pudo obtener información alguna sobre él hasta el 11 de julio, cuando lo reconoció ante un tribunal entre las fotografías de personas muertas. Al parecer, su cadáver se encontraba en el depósito desde el 19 de junio. No hay información sobre qué fue lo que le sucedió entre el 15 y el 19 de junio de 2009, ni siquiera la fecha exacta o las circunstancias de su muerte. Tampoco se ha identificado al autor de la muerte de **Kianoush Asa**, fallecido de un disparo en el cuello durante una manifestación celebrada el 15 de junio de 2009.

Las afirmaciones de las autoridades iraníes, que aseguran haber investigado lo sucedido en los **dormitorios de la Universidad de Teherán** la noche del 14 de junio de 2009, parecen haber dado lugar a que se encarcele a las víctimas, en lugar de a los autores. Según organizaciones estudiantiles –y aunque las autoridades universitarias lo negaron más tarde–, hasta cinco estudiantes murieron, y muchos más resultaron heridos de gravedad, cuando fuerzas no identificadas vestidas de civil irrumpieron en los dormitorios y detuvieron a cientos de personas. En mayo de 2011, el portavoz de la judicatura, Gholam-Hosseini Mohseni-Ejeie (que en el momento de las elecciones era ministro de Información), dijo que se había condenado a 40 personas a penas de prisión y a multas por aquellos sucesos. Sin embargo, según una declaración realizada el 15 de junio de 2011 por la Asociación Islámica de la Universidad de Teherán, los encarcelados son estudiantes que fueron detenidos entonces, no los responsables del ataque.

El artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es parte, establece que los Estados deben garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden interponer un recurso, incluida la posibilidad de un recurso judicial, y que toda decisión en la que se estime procedente dicho recurso debe cumplirse.

Amnistía Internacional lamenta profundamente la recomendación del Comité de Derechos Humanos del Parlamento iraní de que no se permita a Ahmed Shaheed, el recién designado relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, la entrada al país para una visita de investigación. La organización pide al gobierno iraní que rechace esta recomendación y facilite la visita del relator especial en la primera oportunidad posible.

El largo historial de impunidad por violaciones de derechos humanos en Irán

Los funcionarios iraníes llevan muchos años gozando de una impunidad casi total por las violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios ilegítimos y las muertes bajo custodia. Sin embargo, los abogados, periodistas y otras personas que –como Shirin Ebadi, Akbar Ganji, Nasser Zarafshan y Abdolfattah Soltani– han tratado de arrojar luz sobre esas violaciones han sido encarcelados a causa de sus esfuerzos.

Nadie ha rendido cuentas por la “**matanza de la prisión**” de 1988, en la que entre 4.500 y 5.000 presos políticos fueron ejecutados sumariamente, la mayoría en secreto a lo largo de varios meses. En 2009, las autoridades levantaron con excavadoras tumbas individuales y colectivas del cementerio de Khavaran, en Teherán, donde se encontraban enterradas algunas de las víctimas, y plantaron árboles en su lugar. Amnistía Internacional ha manifestado su temor de que estas acciones de las autoridades iraníes tuvieran como finalidad destruir pruebas de violaciones de derechos humanos y privar a las familias de las víctimas de los homicidios de 1988 de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Las manifestaciones estudiantiles de julio de 1999 –conocidas como las “manifestaciones del 18 de tir”– fueron brutalmente reprimidas. Las autoridades sólo reconocieron una muerte –la de **Ezzatollah Ebrahimnejad**–, aunque probablemente hubo más. No se procesó a nadie por esta muerte. **Akbar Mohammadi**, activista estudiantil detenido tras las manifestaciones y condenado inicialmente a muerte, murió bajo custodia en 2006, al parecer después de que las autoridades penitenciarias le denegaran una atención médica adecuada tras una huelga de hambre.

Nadie ha rendido cuentas por la muerte bajo custodia en 2003 de la reportera gráfica **Zahra Kazemi**, de doble nacionalidad iraní y canadiense. Según una investigación gubernamental, Zahra Kazemi murió en el hospital de un traumatismo craneal tras permanecer recluida en la prisión de Evin. Cinco funcionarios –tres miembros del poder judicial de Teherán y dos funcionarios del Ministerio de Información– fueron detenidos en relación con su muerte. Sin embargo, cuatro de los cinco fueron liberados posteriormente, y sólo Mohammad Reza Aghdam, funcionario del Ministerio de Información, fue llevado a juicio. Fue absuelto en 2004, y su absolución se confirmó en apelación en 2005, aunque se ordenó una nueva investigación sobre la muerte de Zahra Kazemi. Tampoco ha rendido cuentas nadie por la muerte bajo custodia en circunstancias sospechosas de la doctora **Zahra Bani Yaghoub**, ocurrida en Hamedan en 2007.

No se tiene conocimiento de que se hayan llevado a cabo investigaciones sobre la muerte de al menos dos manifestantes –**Sane' Zhaleh** (26 años) y **Mohammad Mokhtari** (22 años)–, fallecidos durante las manifestaciones convocadas por los dirigentes de la oposición Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi el 14 de febrero de 2011 en apoyo de la población de Egipto y Túnez. Las autoridades consideraron que las manifestaciones eran ilegales, y desde entonces mantienen a los dos dirigentes bajo arresto domiciliario. También alegaron que Sane' Zhaleh –miembro de la minoría kurda y musulmán suní– era un miembro del Basij muerto a manos de los manifestantes, pero su familia lo negó. Tampoco se tiene conocimiento de que se hayan investigado las muertes de **Haleh Sahabi** –fallecida el 2 de junio de 2011 durante el funeral de su padre, al ser golpeada por un miembro de las fuerzas de seguridad– y de **Hoda Saber**, preso de conciencia vinculado a la Alianza Nacionalista Religiosa. Hoda Saber murió bajo custodia el 12 de junio de 2011 tras una huelga de hambre emprendida para protestar por la muerte de Haleh Sahabi. Según una carta firmada por más de 60 de sus compañeros de prisión, antes de su muerte lo golpearon y le negaron tratamiento médico adecuado.